



LA PAZ SUSPENDIDA

El estado demostró su incapacidad para prever acciones insurgentes de mayor escala. Según especialistas, una revuelta de grandes proporciones es lejana, sin embargo, el país parece descansar sobre un polvorín

MARIANA GONZÁLEZ

Un hombre que esconde una caja con municiones y armas en medio de su milpa. Sujetos armados que realizan prácticas marciales en medio del espeso bosque. Militares resguardando una carretera.

Estas son escenas de la película *El violín*, del director Francisco Vargas, pero bien podrían corresponder a la realidad de cualquiera de los pueblos del sureste de México, donde se estima hay una mayor concentración de grupos guerrilleros.

La guerrilla es un elemento constante en la realidad del país desde hace tres décadas. De acuerdo con datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de Justicia, hay nueve movimientos armados “que operan desde la clandestinidad”.

Estas agrupaciones “operan en Guerrero, Morelos, Estado de México y Chiapas”, entre

ellos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo.

No obstante, hay quienes aseguran que el número de organizaciones político-militares podría ser hasta cuatro veces mayor. En un comunicado fechado el 19 de junio de 2000, el EZLN refería que el gobierno y el ejército tenían conocimiento de por lo menos 26 organizaciones guerrilleras en 19 estados de la república.

En ese mismo año, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria publicó un mapa en el que contabilizaba 23 organizaciones armadas en el país, con base en datos dados a conocer por diversos medios de comunicación.

Aún más, en un artículo publicado el 8 de abril de 2004, en su columna “Contrapuntos”, en el diario electrónico *Transición*, José Martínez reveló los resultados de un reporte confidencial de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención, de la Policía Federal Preventiva.

▲ Un miembro del EZLN hace guardia afuera de un edificio dónde se reúne la dirigencia zapatista. Foto: Milenio

Sin precisar la fecha, el documento indica la existencia de grupos guerrilleros en 22 entidades, clasificándolos en organizaciones con presencia nacional (nueve en total) y con presencia regional (que suman 82), sobre todo en estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca.

Para Rafael Sandoval, académico del Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones, de la UdeG, podría haber muchos más que estos, pues “cinco personas armadas para defenderse de ataques de los caciques pueden ser consideradas un grupo guerrillero” y en la actualidad hay “decenas de miles de focos de resistencia y rebeldía en el país” que no aparecen en los medios de comunicación.

En una entrevista con miembros de organizaciones armadas, publicada por el periódico *La Jornada*, el 15 de julio de 2006, Gertrudis, dirigente del Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, advertía que los grupos guerrilleros “están emergiendo también en el norte, no nada más en el sur”.

Estos levantamientos son producto de la crisis política y social, así como de la represión operada desde el aparato de Estado en México, que se agudizó en 2006 y en los seis meses de gestión de Felipe Calderón Hinojosa, consideró Sandoval.

Subraya que la actividad y presencia guerrillera en el país, evidenciada de manera reciente con los bombarzos del EPR a los ductos de Pemex, a inicios de julio pasado, está enmarcada en un momento de coyuntura histórica del país.

Para entender este proceso —dice— hay que considerar cinco elementos fundamentales en los años recientes: la utilización del ejército para la desaparición de guerrilleros, el debilitamiento de las organizaciones del Estado dedicadas a las prácticas militares y de inteligencia, el proceso de militarización del territorio mexicano, la represión contra la población civil y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como la crisis derivada del proceso electoral de 2006.

“Todo esto ha generado una crisis política del Estado. El gobierno ha demostrado que no puede controlar al crimen organizado ni las protestas y movilizaciones sociales. Tenemos como ejemplo a Oaxaca o Atenco. El gobierno no trata de pararlos, sino que los está reprimiendo y tratando de contener. La repuesta de la guerrilla es una manera de resistencia, pues no ha dejado de estar presente en México desde 1965”.

En un artículo publicado el pasado 14 de julio en *La Jornada*, el columnista y escritor Carlos Montemayor afirma que el gobierno elimina de manera sistemática “la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierte en delincuencia o criminalidad injustificable”. De esta manera la autoridad se aleja de “la obligación de emprender un análisis social y político más a fondo y reduce sus respuestas a medidas de represión selectiva o desbordada”. Evalúa a los movimientos subversivos según “su capacidad de fuego, no por su significación política”.

Sandoval Álvarez coincide con el investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, Jorge Cereceda, en que los efectos del Tratado de Libre Comercio en México, en especial la apertura de fronteras para la importación de semillas como el maíz, ha provocado un descontento social creciente en el país. “El Estado retira los subsidios al campo, promueve el despojo de tierras y territorios comunales y ejidales mediante programas como el Procede, para ponerlas a disposición de las transnacionales



▲ Un integrante de la APPO lanza una bomba molotov contra miembros de la Policía Federal Preventiva acuartelados en Oaxaca. Foto: Milenio

primer plano

disfrazadas de proyectos ecoturísticos. Además, esto se acompaña de una política de militarización y represión social. Es lo que el EZLN ha catalogado como la nueva *guerra de conquista*”.

Tales condiciones han generado un campo propicio para la incubación de organizaciones guerrilleras, advierte Cereceda, que si bien no actúan militarmente, sí están buscando el apoyo de las comunidades campesinas y la sociedad. Miles de organizaciones que luchan y resisten la represión están conformando frentes contra la política de despojo y explotación del Estado, señala Sandoval Álvarez.

Las muestras de solidaridad por parte de las bases del EZLN y otros grupos armados, a la petición hecha por el EPR al gobierno federal de presentar a dos de sus militantes desaparecidos, no significa que estos vayan a unirse, consideran los académicos.

En la citada entrevista, realizada por Jesús Aranda, reportero de *La Jornada*, a dirigentes de grupos subversivos, José Arturo, militante de la Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo, menciona que la idea de impulsar un nuevo constituyente puede ser el punto que propicie “la articulación de las diversas fuerzas armadas y sociales para establecer un nuevo pacto social que no necesariamente tiene que ser por una ruta violenta”.

Los guerrilleros están conectados con comunidades, barrios y organismos sociales, aunque no coincidan en la lucha armada. Por lo tanto, la posibilidad de que respondan de manera violenta no depende de su voluntad, y ellos lo saben. Dependen de la disposición de lucha de las organizaciones sociales, de la sociedad civil y de las comunidades, menciona Sandoval Álvarez. “Más que una respuesta violenta, lo que se está generalizando es la respuesta fragmentada en cientos de regiones y localidades ante la represión del Estado. No significa que se pusieron de acuerdo, sino que hay una manifestación dispersa ante el despojo”.

En opinión de Jesús Zamora García, quien realizó una tesis sobre la historia de la guerrilla Unión del Pueblo (antecedente directo del

EPR), es poco viable que el EZLN se una a las formas de operar del EPR, porque su lógica de lucha no es tan radical ni extremista. “Ellos han hecho un trabajo de integración y cambio muy suave, que les ha resultado. Volver a las armas sería la desintegración o el autoaniquilamiento, porque no es su lógica de trabajo”.

Regresar a la historia

Las organizaciones guerrilleras de los años setenta encontraron en el gobierno de Echeverría las condiciones sociales, económicas y políticas para una lucha armada. En ese momento la población no respondió. Por eso quedaron sin base social, que es lo más importante para que haya revolución, refiere Zamora García.

—¿En el México actual hay condiciones para que las guerrillas intenten esta lucha armada?

—Hoy hay bombarzos como antes, sobre todo después de la elección de 2006, porque hubo un gran descontento, además se siente en la lectura de los comunicados una postura más enérgica de los grupos armados. A pesar de la sospecha del fraude, un sector grande de la población mexicana está dispuesto a que haya una renovación del aparato democrático sin tener que pasar por las armas.

En estas condiciones es difícil que haya eco para la pretensión de estos grupos de llevar la transformación del país por las armas.

Rafael Sandoval Álvarez recordó que en 1988 había miles de personas armadas dispuestas a responder al fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas y el Partido de la Revolución Democrática emprendió estrategias para calmarlas. “La insurgencia civil no fue espontánea: entre 1982 y 1988 hubo registro en los medios de comunicación de mil 444 conflictos político electorales con violencia. Si ahora no volteamos a ver los focos de autodefensa y resistencia de la gente en general, no solo de campesinos sino de jóvenes en las ciudades, no nos daremos cuenta de que se están generando síntomas sociales para los próximos años. Para que cuando aparezca en los próximos años un fenómeno de autodefensa armada no se vaya a sorprender nadie”.*